

nar el sumario, y cuando el proceso se halle en este estado, diga si insiste ó no en la presente competencia; que ese fallo se comuniqué al Juez 2º de Distrito de esta Capital, para su conocimiento, y en cuanto al expediente que se tiene ahora á la vista, se reserve en la secretaría, para cuando viniendo la competencia en su forma cabal, se pase todo al que suscribe para promover en lo principal.

México, 25 de Enero de 1874.—*Altamirano.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, 13 de Febrero de 1874.—Con fundamento del artículo 7º de la ley de 17 de Enero de 1853 que cita el Señor Fiscal en su anterior pedimento, y en virtud de ser el Juez 2º de Distrito el que comenzó á instruir esta causa, se declara: que á él es á quien corresponde continuarla. Comuníquese á los dos jueces para el cumplimiento de este auto en lo que á cada uno corresponde.—*José María Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*M. Zavala.*—*Simon Guzman.*—*Lic. Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, 28 de Febrero de 1874.—*Lic. Enrique Landa*, secretario.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Matamoros por D. Bernardo Iturria, en representacion de D. Lucius Avery, contra el cobro de ochenta y cuatro pesos ochenta y un centavos, que como impuesto municipal se le hace á la exportacion de seiscientas setenta y ocho y media cargas de plomo líquido, precedente del Mineral del Vallecillo.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito de éste Puerto.

El Promotor fiscal dice: que el C. Bernardo Iturria, como apoderado de D. Lucius Avery, segun el testimonio de la foja 1ª, se presentó á la justicia federal por su escrito de 3 del presente, legible de la foja 5 á la 7, pidiendo amparo por los actos que en su contra ejercía el C. Presidente del H. Ayuntamiento de Camargo, al cobrarle la cantidad de 84 pesos, como impuesto municipal correspondiente á 678 y media cargas de plomo líquido, de las que exportó una parte por el Vapor San Juan, y el resto debía ser tambien exportado.

El solicitante acompañó á su escrito copia de una protesta que sobre el cobro hizo ante el alcalde 1º de Camargo, en virtud de no considerar legal el cobro, que es la que se halla colocada á fojas 8. En ella manifestó que solo se le habian concedido treinta dias de término para la promocion y resolución del juicio de amparo que protestó promover, acerca de lo que otorgó fianza bajo la condicion expresada.

Documentada la demanda de amparo con esos recados, en ella pidió Avery por su poder, que se le amparase en sus derechos, por considerar violadas en su persona é intereses, las garantías consignadas en los artículos 4º y 16 de la Constitucion federal; fundó su solicitud en la primera parte del art. 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, re-

glamentaria de los arts. 101 y 102 de la Constitución de la República.

Por un otro sí, el actor solicitó el que se suspendiese por el Juzgado la orden de pago, por considerar el asunto de urgencia notoria, en virtud de que al siguiente día 4 concluían los 30 días de suspensión otorgados por el C. Presidente del H. Ayuntamiento de Camargo, suplicando á la vez que por la vía telegráfica se comunicase la resolución judicial al C. Presidente del H. Ayuntamiento, haciéndoselo la intimación por el Alcalde 1º constitucional de Camargo.

El Juzgado, atendiendo en justicia esta última solicitud, la decretó de conformidad en uso de la facultad que le concede la parte final del art. 5º de la ley de amparo; y ejecutada y cumplida su disposición según lo evidencia la diligencia del frente de la foja 9, por su otro auto de 9 del presente, lo gible al final del reverso de la misma foja, dispuso que el funcionario contra quien se promovía el amparo diera el informe que con justificación debía rendir, según el art. 9º de la misma ley, lo que había en el término de tres días contados desde la notificación sobre el ocuso del actor que se le pasaría en copia, con cuyo fin se le libró el correspondiente exhorto al Juez 1º constitucional de la ciudad de Camargo.

El exhorto es el que se encuentra colocado en la foja 15, y de la 16 á la 19 inclusive se halla el informe que el C. Trinidad Aldrete, Presidente del H. Ayuntamiento de Camargo, rindió sin presentar documento con que justificarlo. En él expresa, que la violación del art. 4º de que hace referencia el actor, es supuesta, en virtud que desde el año de 1856, había sido aprobada por el Gobierno del Estado la práctica de cobrar el impuesto, por ser uno de los particulares comprendidos en el plan de arbitrios, por el que se impone medio real á todo bulto de efectos nacionales del peso de seis arrobas que entren á la población, siendo igual la cuota impuesta á una

piel de res y á una arroba de lana, por ser del resorte municipal arbitrarse recuos para su propio sostén. También manifiesta, que no puede jamás suponerse infracción del art. 16 del pacto fundamental, el exigírsele el pago del arbitrio que siempre se ha considerado como impuesto de piso á todos los efectos que estén en la población, y que para ello se ha tratado al Sr. Avery con todas las consideraciones debidas, pues á su negativa de exhibir el impuesto, ni siquiera se decretó un embargo, facultad que podía ejercer la corporación, y al contrario se le dejó amplia libertad para que por la vía legal hiciera valer sus excepciones. El mismo funcionario recomienda el que, por el art. 33 de la Constitución federal, los extranjeros avecindados en el país tienen obligación de contribuir como los mejicanos, para los gastos públicos de la manera que dispongan las leyes; y por último, hace especial recomendación de que uno de los ramos preferentes á que se dedican los productos municipales, es el de instrucción pública que en la ciudad de Camargo y su jurisdicción dá los mejores resultados, como lo acreditan los varios planteles que sostiene.

El Ministerio público en vista de las razones y disposiciones legales en que funda su demanda el actor, y de las excepciones y reflexiones recomendadas por el funcionario contra quien aquel se ha dirigido, por un acto con el que considera violadas dos garantías constitucionales, para emitir su dictámen en los términos que cree de justicia.

Una verdad reconocida, porque es efecto de una disposición legal, es la de que todos los productos, efectos y manufacturas nacionales que se dirijan á los puertos para su exportación, están libres del pago de todos derechos. Esta declaratoria está hecha por la autoridad que únicamente puede legislar en lo relativo al comercio extranjero; así es, que su disposición no puede ser alterada ni reformada por ninguno otro po-

der público, bien sea municipal ó de los Estados; porque á permitirse, se sancionaría un principio que lo rechazan el buen orden administrativo, con el que á la vez se destruirían las facultades consignadas á los poderes públicos.

Así es que, debiendo considerarse el arancel como ley constitucional, en virtud de ser expedido por el Congreso de la Union, en uso de la facultad que le otorga la fraccion 9ª del art. 72 de la Constitucion federal, no hay autoridad que pueda enervar sus preceptos.

Y esa facultad que está expresamente negada á los poderes superiores de los Estados, no puede jamás pretenderse el que la ejerza una municipalidad, cuyas facultades no son otras que las económicas, limitadas al orden y conservacion de las poblaciones.

Para ello tienen facultad de arbitrase recursos, cuyo plan proponen al Gobierno de los respectivos Estados para la superior aprobacion; pero en ellas jamás puede creerse que esté imbfbita la de hacer lo que la ley prohíbe, y pretenderlo en contra de un particular, importa en concepto del Ministerio público, violar las garantías que posee.

En esta facultad y con respecto al régimen interior de la poblacion, estará en su derecho la municipalidad para cobrar el impuesto de piso, á los efectos que entren á la poblacion y deban consumirse en ella; pero ese derecho jamás puede hacerse estensivo á los que al mismo Puerto fronterizo, lleguen para ser exportados, que es de lo que se trata.

Un ejemplo concurrirá á demostrar la exactitud de esa operacion. La plata en pasta y acuñada puede y debe ser considerada como efecto nacional. ¿Tiene derecho la municipalidad para cobrar á cada seis arrobas de peso, el impuesto que pretende sobre el plomo? Contestarse afirmativamente no puede esta interrogacion; y lo que no se puede hacer con la plata que es para exportarse y que ya ha pagado sus derechos arancelarios, tampoco puede hacerse con los efectos

nacionales que la ley ha declarado libres de derechos á su exportacion.

No considera el Ministerio público, de buena aplicacion la cita que se hace del art. 33, sobre la obligacion de los extranjeros á contribuir proporcionalmente para los gastos públicos, porque está cierto de que si el Sr. Avery ejerce alguna profesion ó industria, ó tiene algun establecimiento mercantil ó bienes en Camargo, pagará ó hay derecho para que se le exijan las contribuciones tanto del Estado como municipales, que estén decretadas.

Laudable es lo que recomienda el C. Presidente del H. Ayuntamiento de Camargo, del estado de progreso en que se halla el ramo de instruccion pública; pero por mas laudable que sea ese buen estado, el Ministerio público no encuentra razon para que fundado en él, se haga lo que la ley prohíbe.

Por todas estas reflexiones, el Promotor fiscal concluye manifestando, que considera legal y digna de ser atendida en justicia la solicitud de D. Lucius Avery, y que por ello debe decretarse en definitiva, que la Justicia de la Union lo ampara y protege, contra el cobro del impuesto municipal que le exige el C. Presidente del H. Ayuntamiento de Camargo, en la exportacion de plomo á que se refiere en su escrito de demanda.

Matamoros, Diciembre 30 de 1873.—
Francisco J. Arzamendi.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

H. Matamoros, Enero 12 de 1874.—Vistos: el escrito que en 3 de Diciembre último presentó el C. Bernardo Iturria, en nombre del Sr. D. Lucius Avery agente comercial en Camargo, pidiendo amparo contra el acto del C. Presidente del H. Ayuntamiento de dicha Ciudad, que pretende cobrarle ochenta y cuatro pesos ochenta y un centavos de *impuesto municipal*, á seiscientas setenta y ocho y media cargas plomo líquido,

de las que una parte exportó ya, estando la otra por exportar; con lo que reputa violadas las garantías que la Constitución general de la República otorga á los dueños de los intereses, que defiende en los arts. 4º y 16; el poder constante á fojas 1, con que acredita el actor su legítima personalidad; la fianza que otorgó y se halla á fojas 3, garantizando exhibir la suma que se le exige, si dentro de treinta días no intentaba el recurso que motivó este juicio y obtenía una resolución favorable; el decreto de fojas 7 vuelta de inmediata suspensión del acto reclamado; el informe de fojas 16 de la autoridad ejecutora; lo expuesto á la 21 por el C. Promotor fiscal, apoyando la acción del quejoso; el alegato del promovente y la citación para sentencia.

Considerando: Que sin el consentimiento del Congreso de la Unión, en ningún caso pueden los Estados imponer contribuciones ó derechos sobre exportaciones, como lo previene con estas palabras textuales el art. 112 fracción 1ª del Código fundamental de 5 de Febrero de 1857.

Que siendo esta una facultad de las reservadas á la Cámara, derivada de ella, está prescrito en el Arancel de Aduanas marítimas y fronterizas de 1º de Enero de 1872, que son libres de derechos á su exportación, todos los productos, efectos y manufacturas nacionales.

Que aun cuando el C. Presidente del II. Ayuntamiento de Camargo informa, que con el cobro que se combate, trata de complementar una práctica allí establecida y aprobada por el Gobierno del Estado desde principios de 1856, exigiendo medio real á todo bullo de efectos nacionales que pese seis arrobas, á cada arroba de lana y á cada piel de res que entre á la población, consumase ó no ella, cuyos productos se destinan al fondo de instrucción pública; exigiendo este pago al plomo que va á embarcarse, se convierte en impuesto de exportación á un producto nacional, lo que prohíben la Cons-

titución y ley Arancelaria mencionadas, se declara:

1º. Que la Justicia de la Unión ampara y protege al Sr. D. Lucius Avery, contra el cobro de los ochenta y cuatro pesos ochenta y un centavos, que como impuesto municipal se le hace á la exportación de las seiscientas setenta y ocho y media cargas de plomo líquido, procedente del Mineral del Vallecillo.

2º. Que se notifique á las partes, haciéndolas saber á la autoridad ejecutora, por medio del Juzgado 1º constitucional del punto en que reside, y

Tercero. Que sacándose una copia de esta sentencia para su publicación, se eleve el expediente original á la Suprema Corte de Justicia en revisión.

Así definitivamente juzgando y sentenciando, lo decretó y firmó el C. Juez de Distrito, Lic. Manuel Mendiola, por ante mí. Doy fé.—Manuel Mendiola.—Felipe N. Garza y Garza, secretario.

Es copia de su original que certifico. II. Matamoros, Enero 15 de 1874.—Felipe N. Garza y Garza, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Febrero 12 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Matamoros por D. Bernardo Iturrin, en representación de D. Lucius Avery, contra el acto del Presidente municipal de Camargo, que le exige el pago de un impuesto municipal, á seiscientas setenta y ocho y media cargas de plomo líquido, de las que una parte se ha exportado ya y otra vá á exportarse; el informe de la autoridad responsable; el pedimento fiscal y la sentencia del inferior; con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitución, se declara: que es de confirmarse y se confirma por sus propios legales

fundamentos, la sentencia del Juez de Distrito, que ampara al quejoso.

Devuélvanse las actuaciones al Juez de que proceden, con copia autorizada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan José de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio Altamirano.*—*Simón Guzmán.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*Lic. Enrique Landa,* secretario.

Es copia. México, Agosto 27 de 1874.—*Lic. Emilio Ordaz,* oficial mayor interino.

INCIDENTE.

En la causa iniciada por el delito de robo y asalto, cometido en la persona del C. Eduardo Ramirez.

Pedimento del C. Fiscal de la Suprema Corte de Justicia.

El Fiscal dice: que el C. Eduardo Ramirez, se presentó ante el C. Prefecto político de Teocaltiche, manifestándole que en la mañana de ese día, en que se presentó, viniendo de Nochistlán acompañado de Mateo Martínez y la muger de este Asuncion Gomez, fué asaltado por cuatro hombres en el camino, á un lado del Rancho llamado de los Carrillos, situado en la jurisdicción de Nochistlán, y resultando de ese asalto que los ladrones le quitaran la cantidad de doscientos veintinueve pesos y una carabina, y desaparecido el espresado Mateo Martínez y su muger, á los cuales los bandidos habían tratado con consideración, mientras que al exponente lo habían maltratado de palabra

TOMO V.—PARTE II.

y obra; que aunque no conoció á los asaltantes, sus sospechas recaen en Mateo Martínez, y por lo mismo lo acusaba de complicidad con los ladrones.

En vista de esa manifestación, el Prefecto de Teocaltiche se declaró incompetente mandó se remitiese lo actuado al Juez de 1ª instancia del departamento.

Rendidas en efecto las diligencias por el C. Juez de Letras del departamento, también se declaró incompetente, y dispuso que lo actuado en compañía del reo fuera remitido al Juez de 1ª instancia de Nochistlán.

A su vez el Juez de Nochistlán falló que no juzgándose competente, se volvieran las diligencias al Prefecto político del partido de Nochistlán, para que procediera á lo que hubiera lugar; pero este Gefe político á su turno mandó devolver diligencias y reo al Prefecto de Teocaltiche, para que este como primera autoridad aprehensora de Martínez las continuara. Mas el Prefecto de Teocaltiche insistiendo en su incompetencia remitió lo actuado por segunda vez al Juez de 1ª instancia del Departamento, el cual por su auto de 14 de Febrero de 1873, después de repetir su fallo de incompetencia, determinó se elevaran las diligencias al Tribunal superior de Zacatecas, á fin, dice el auto, de que estreche al Juez de Nochistlán para que se aboque el conocimiento de este negocio; y además mandó también poner en libertad, como se verificó en efecto, á Martínez, á pretexto de no hacerse cómplice en la violación de garantías que el encausado estaba sufriendo.

Elevadas por fin las actuaciones al Tribunal Superior del Estado de Zacatecas, este declaró que no estaba en el caso de conocer de este negocio, y que por lo mismo se devolvieran al Juzgado que las había remitido, cuyo acuerdo se comunicó al Juez de 1ª instancia de Teocaltiche, con lo que terminó este expediente.

Como desde luego se nota por el extracto que se deja hecho, ha habido una serie de irregularidades por parte de todas las